

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta 198

Medellín, primero (1º) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir pronunciamiento respecto del recurso de apelación interpuesto por **PROTECCIÓN S.A.**, referente a la decisión tomada en providencia de excepciones del **06 de mayo de 2022**, dentro del proceso ejecutivo interpuesto por **PROTECCIÓN S.A.** contra **INTEGRALIDAD TEMPORAL LTDA EN LIQUIDACIÓN Y OTROS**.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Mediante providencia del **06 de mayo de 2022** el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín resolvió las excepciones propuestas por la ejecutada.

En dicha audiencia la Juez decidió de la siguiente manera:

PRIMERO: DECLARAR que ESTÁ LLAMADA A PROSPERAR DE MANERA PARCIAL, LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN de aquellos aportes adeudados del 28 de noviembre de 2012 hacia atrás, tal como se indicó en la parte considerativa.

SEGUNDO:NO PROSPERAN las demás excepciones propuestas, según se indicó en párrafos anteriores.

TERCERO: Ejecutoriado este proveído y atendiendo los términos establecidos por el artículo 446 del Código General del Proceso, aplicable a este trámite por el principio de integración normativa, las partes deberán presentar la liquidación del crédito, teniendo en cuenta la prescripción de los aportes antes señalados. Además de adjuntar los comprobantes de pago en el evento de que los haya hecho la ejecutada.

CUARTO: Sin costas Lo resuelto se notifica por ESTADOS.

Recurso parte ejecutante

El apoderado de la parte ejecutante interpuso recurso en el que manifestó que no está de acuerdo en que la Juez de conocimiento haya declarado probada parcialmente la excepción de prescripción.

El despacho declara la excepción de prescripción frente los aportes no realizados por el empleador antes del 2012, lo cual constituye una interpretación errada de la norma, aplicando la prescripción establecida en el estatuto tributario.

El fallo recurrido y apelado, se encuentra desconociendo los argumentos expuestos por esta apoderada en el recorrido de la demanda, donde se indica claramente las normas aplicables a los aportes pensionales en el sistema de ahorro individual, como lo es Protección, y las cuales van desde la constitución nacional, hasta las normas específicas, desconoce el juzgador, que la prescripción es una sanción por el transcurso del tiempo de inactividad, por lo tanto, no es posible la aplicación por analogía de una norma sancionatoria.

Así las cosas, para poder aplicar una prescripción en materia de aportes pensionales en seguridad social, sería necesaria una norma expresa, la cual no existe, ni en la ley 100 ni en las demás normas complementarias, siendo errado declarar prescrito los aportes. Así mismo, se evidencia que el fallo se está apartando de la doctrina probable, por lo tanto, es pertinente señalar que, en desarrollo del principio de legalidad, los jueces en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley, y deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.

Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, de la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.

Ahora bien ¿Que es Doctrina Probable?, de acuerdo con la Sentencia C-836-2001.

En el caso en concreto no es aceptable para un Juez apartarse del precedente de su superior jerárquico y quien tiene a cargo de unificar la jurisprudencia ordinaria y aplicar la jurisprudencia de otra Jurisdicción, ya que se estaría apartando del mandato Constitucional en el artículo 230 y de la jurisprudencia, tal y como se observa en varias sentencias de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia que “..Una decisión judicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la autonomía judicial, en realidad está desconociéndolos y omitiendo el cumplimiento de un deber constitucional...” sentencias C-836-2001, C-621-2015, es deber del juez de exponer las razones por las cuales se aparta de la doctrina probable resulta acorde con la autonomía judicial y la naturaleza de las fuentes del derecho enunciadas en el artículo 230 de Constitución Política así como lo establece en las sentencias ya citadas el valor normativo formal de la doctrina judicial es una consecuencia de la seguridad jurídica y de la confianza legítima en la

administración de justicia, cuya garantía resulta indispensable para el ejercicio de las libertades individuales.

La certeza que la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma es una garantía que se relaciona con el principio de la seguridad jurídica. Ahora bien, podría afirmarse que la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente.

Adicionalmente, la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y Sala de Casación referente en materia de la no prescripción de los aportes a pensión, según el criterio ya descrito de la Corte en la sentencia 35083 del 06 de mayo de 2010 con la ponencia del Magistrado Gustavo José Genecco Mendoza y que ratifica la línea jurisprudencial que es precedente de obligatoria aplicación para la administración de justicia.

Por ultimo su señoría la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en Sentencia 42740, del 23 de octubre de 2012, con ponencia del honorable Magistrado Carlos Ernesto Molina estable que *“los Jueces deben emplear todos los medios a su alcance para concreción de derechos pensionales, Cuando se trata de derechos fundamentales, como el derecho a la pensión, los jueces deben emplear todos los medios que tienen a su alcance para su concreción, entre ellos la facultad de decretar oficiosamente la práctica de pruebas (Código Procesal del Trabajo, artículo 54)”*. Porque su sería desconocer todos estos argumentos sería aprobar la evasión de cumplir con las obligaciones de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones.

En conclusión, solicitamos se aplique lo ordenado en la sentencia SL763-2014 radicación 44501 Magistrado ponente Clara Cecilia Dueñas de la Corte Suprema de Justicia en la que señala que de existir una posible evasión, o retención de aportes a la seguridad social es deber del juez de conocimiento solicitar a la entidad competente para que investigue dicha conducta, ello significa que la conducta de la empleadora, además de morosa, probablemente pudo constituir otra de carácter punible, según lo dispone el artículo 7° de la Ley 828 de 2003 «Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social».

De conformidad con lo anteriormente expuesto, solicito al despacho reponer la decisión y en lo que respecta a la declaratoria de prescripción, ordenando seguir adelante la ejecución por todos los aportes pensionales cobrados en la demanda, y adeudados por el empleador. En caso negativo a la solicitud anterior, ruego se conceda el recurso de apelación.

Por auto del 10 de mayo de 2022 la Juez de instancia niega el recurso de reposición porque no es procedente frente a la sentencia de excepciones y procede a conceder la apelación.

Corrido el término de traslado establecido en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022. No se presentaron.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Según lo establecido por numeral 1) del literal b) del artículo 10 de la Ley 712 de 2001, las Salas de los Tribunales Superiores de Distrito son competentes para resolver el recurso de apelación contra los autos susceptibles de este medio de impugnación, tal como lo es el que resuelve las excepciones en los procesos ejecutivos, numeral 9, Artículo 29 Ley 712 de 2001), proferido por los jueces laborales de circuito en primera instancia.

Para resolver es importante mencionar que si bien por regla general los aportes pensionales son imprescriptibles, este presupuesto solo procede frente al trabajador que pretende integrar con dichos aportes su patrimonio pensional, sin embargo ello no es aplicable para las acciones de cobro que promuevan las administradoras de fondos de pensiones y cesantías contra los empleadores de sus afiliados, pues el mismo se constituye como un cobro fiscal conforme a las facultades dispuestas en el Decreto 1161 de 1994, y por ende, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 817, modificado por el artículo 86 de la ley 788 de 2002, donde se precisa los eventos a partir de las que se debe contabilizar el término de la prescripción de 5 años para las entidades administradoras.

Al respecto dice dicha norma. *La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria. La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor."*

Es decir, que, en materia de cobro coactivo de contribuciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social, ha señalado desde antaño la jurisprudencia que, debido a la naturaleza tributaria de las cotizaciones, las reglas a aplicar al procedimiento son las contenidas en el Estatuto Tributario.

Como ejemplo de ello la Sentencia del 26 de marzo de 2009, del Consejo de Estado No. de radicación: 0422-01, dispuso *"En consecuencia, contrario a lo que considera el demandante, estos aportes a la Seguridad Social sí son contribuciones parafiscales, por lo que para su cobro se debe aplicar el Estatuto Tributario, conforme al artículo 54 de la Ley 383 de 1997, según el cual, "las normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobro contenidas en el libro quinto del estatuto tributario nacional, serán aplicables a la administración y control de las contribuciones y aportes inherentes a la nómina, tanto del sector privado como del sector público, establecidas en las leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100 de 1993". Como dentro de estas contribuciones se cuentan aquellas en favor del ISS, debe acudirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas laborales, como lo pretende el actor"*

A demás la citada Corporación ha precisado que el término de prescripción del cobro de aportes al de las administradoras de fondos de pensiones es de cinco años contados a partir del último periodo adeudado.

“Así las cosas, en el sub examine el término de prescripción de la acción de cobro, regulado por el artículo 817 del Estatuto Tributario debe contarse a partir de la fecha en que los aportes patrono - laborales se hicieron legalmente exigibles. [...] Por ello, en consideración a la normativa en mención, la exigibilidad de los aportes parafiscales a cargo del empleador y a favor del Instituto de los Seguros Sociales, se inició al momento en que debía ser cumplida la obligación, período a partir del cual la entidad tenía la facultad para exigir su pago, esto es, los cinco años contados a partir del último periodo adeudado que, como se vio, fue en 1998”

Al respecto la Sala considera que no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que debe aplicarse el precedente de la Corte en cuanto a que los aportes a la seguridad social no prescriben, toda vez que eso es cierto, pero frente a los trabajadores de modo que, el procedimiento administrativo de cobro coactivo es especializado, por lo que ha sido regulado de manera puntual en el título VIII del Libro V del Estatuto Tributario Nacional, luego, lo atinente al término de prescripción del cobro de aportes, son aplicables las normas que regulan el procedimiento mencionado, concretamente lo dispuesto en el Capítulo II del Título VII del Libro V.

Entonces para el caso teniendo en cuenta que dentro del presente proceso judicial se controvierten actos expedidos en virtud de la facultad de jurisdicción coactiva al respecto de aportes al sistema general de seguridad social a favor del fondo de pensiones, se concluye que la prescripción de acción de cobro de la administración, acaece al finalizar el término de cinco (5) años contados desde el momento en que se materializa el atributo de la exigibilidad de las obligaciones parafiscales.

Aunado a lo anterior, habrá de comprenderse que la exigibilidad de los aportes parafiscales a cargo del empleador y a favor del fondo de pensiones, tuvo lugar en el momento en que debía ser cumplida la obligación por parte del empleador que ahora demanda. Al respecto, los artículos 22 de la Ley 100 de 1993 disponen: "Art. 22 Ley 100 de 1993: *El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno...*" (Negrilla intencional)

En el presente caso la entidad demandada tuvo como título ejecutivo la liquidación certificada de deuda No. 6380-18, (fls. 9 y ss, la cual se contrae a los aportes patrono-laborales de diversos periodos, siendo el más antiguo el 2007-11 y el más reciente el 2013-09.

Radicado No. 05001-31-05-015-2018-00309-01
Radicado Interno A14022
Asunto: Confirma decisión

La reclamación se presentó el 28 de noviembre de 2017 (fls. 11), y la demanda fue radicada el 09 de mayo de 2018, se tiene que para este momento la acción de cobro se encontraba ya prescrita desde el 28 de noviembre de 2012 hacia atrás, y por tanto no operó la interrupción del término de prescripción.

Le asistió entonces razón a la Juez de primera instancia en declarar parcialmente probada la excepción de prescripción sin que se haya apartado caprichosamente del precedente como lo asevera la apoderada recurrente, por tratarse del cobro de aportes parafiscales, adeudados por el aportante, en este caso el empleador, el término de prescripción es de 5 años, de conformidad con el estatuto tributario.

Se deja claro entonces que el hecho que el fondo haya permitido que operara la prescripción, no significa que el afiliado asuma carga alguna, por ende, pese a ello la entidad asume el reconocimiento de esas cotizaciones sobre los que operó la prescripción.

Así las cosas, la Sala encuentra que debe **CONFIRMAR** la providencia del **06 de mayo de 2022**, por medio de la cual se declaró parcialmente probada la excepción de prescripción.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A., y a favor de la parte ejecutada. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$500.000

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia dictada por la Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín el **06 de mayo de 2022**, en el proceso ejecutivo adelantado por **PROTECCIÓN S.A.** contra **INTEGRALIDAD TEMPORAL LTDA EN LIQUIDACIÓN Y OTROS**, según las consideraciones de la parte motiva.

Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A., y a favor de la parte ejecutada. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$500.000

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

LOS MAGISTRADOS

Radicado No. 05001-31-05-015-2018-00309-01
Radicado Interno A14022
Asunto: Confirma decisión



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 134 del 02 de agosto de 2022.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>